

DEMOCRACIA LOCAL *VERSUS* DEMOCRACIA GLOBAL O COSMOPOLITA

Los problemas y conflictos han trascendido, hoy en día, las fronteras geográficas, por lo que se ha creado la necesidad de diseñar soluciones colectivas entre varios países en el ámbito internacional, lo cual ha ocasionado el surgimiento de un importante debate sobre si el Estado-nación es y debe ser, o no, el caparazón institucional de la democracia.

Tradicionalmente, la democracia ha tenido como marco de referencia al Estado-nación; es decir, se piensa en un gobierno dentro de un territorio delimitado y en los derechos y obligaciones de los ciudadanos de esa nación; no obstante, el mundo contemporáneo ha sufrido una transformación en la medida en que se ha producido una importante interconexión económica entre los países; las fases del proceso de producción se han dividido y se realizan en naciones distintas, el mercado laboral se conforma con migrantes de varios orígenes y los flujos financieros se mueven instantáneamente por el mundo en busca de las mayores ganancias. Finalmente, la llamada supercarretera de la información establece un espacio virtual donde los individuos crean redes internacionales, de acuerdo con demandas específicas o con problemas determinados.

La globalización ha provocado el surgimiento de problemas compartidos que no reconocen los límites del Estado-nación, por lo tanto, las organizaciones no gubernamentales (ONG) entablan demandas internacionales a los gobiernos nacionales en la medida en que sus representados se ven afectados por esas dificultades comunes. La gente es capaz de demandar a los gobiernos para que sean supervisados por grupos interesados en una variedad de asuntos.

Cada gobierno responde en forma distinta a estas exigencias. Sin duda, estos cambios pueden contribuir al desarrollo democrático en la medida en que se formulan demandas de redes internacionales en la búsqueda de solu-

ciones a problemas globales, siempre y cuando las ONG también acaten los patrones democráticos de rendición de cuentas y acceso a la información y, por supuesto, no sean utilizadas por los intereses privados.

¿Cómo han afectado todos estos cambios la concepción de democracia? Algunos autores, como Anthony Giddens, argumentan que “la crisis de la democracia nace, hoy en día, de no ser lo suficientemente democrática” (Giddens, 1998: 71). En su opinión, los sistemas políticos no se han adaptado a las nuevas circunstancias de la globalización. El mundo globalizado exige una sociedad civil renovada. Es necesario que se lleve a cabo una descentralización del poder, pero también debe devolverse el poder hacia arriba, porque de lo contrario se puede producir una fragmentación. En este sentido, no se trata simplemente de debilitar al Estado; más bien, sociedad civil y Estado tendrían que actuar conjuntamente en una asociación productiva para fiscalizarse mutuamente. Es indispensable que exista una mayor transparencia y ponerle límites a la corrupción en todos los ámbitos. El Estado y los ciudadanos cuentan ahora con el mismo entorno de información y, por lo tanto, no es que la corrupción haya aumentado, sino que las formas anteriores de practicar la política se están revisando para limitar los privilegios, reducir los conflictos de intereses y combatir las negociaciones poco claras; es decir, el ambiente político ha cambiado (Giddens, 1998: 75).

En la actualidad, los Estados no tienen “enemigos”, es decir, otros modelos político-económicos posibles a seguir, como sí existían entre el Estado liberal y el socialista, por lo tanto, tienen que “recuperar su legitimidad [...] y elevar su eficiencia administrativa” (Giddens, 1998: 74), porque finalmente es el Estado el que tiene la última palabra en las decisiones acerca de los intereses en conflicto en la sociedad civil. Esto sin duda era cierto cuando escribió Giddens, pero recientemente el liberalismo sí se ha topado con un modelo rival, debido al surgimiento de los populismos, tanto los de derecha como los de izquierda.

De acuerdo con este autor, dada la realidad de la globalización el Estado debe ser cosmopolita; tiene que serlo para ayudar a promover la inclusión social, pero sobre todo tiene que desempeñar el papel fundamental de crear un sistema transnacional de gobernanza democrático, en la medida en que las circunstancias del mundo han cambiado, porque los problemas globales requieren de la cooperación entre países. “La Unión Europea es un ejemplo de una respuesta a la globalización” (Giddens, 1998: 141), pues ha

consolidado instituciones que rebasan los límites del Estado-nación hasta entrar en contacto con los individuos. Si bien no es completamente democrática, si se trata de un experimento en la dirección correcta (Giddens, 1998: 142). Ahora bien, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea ha comenzado a sembrar dudas sobre su viabilidad en el largo plazo.

Para David Held, la democracia debe redefinirse dependiendo de las distintas dinámicas particulares, debido a las interconexiones globales en los niveles locales, regionales y mundial, junto con otras instituciones deliberativas y representativas. Esto significa que la idea de democracia va más allá de los límites geográficos del Estado-nación (Held, 1995: 278). Según este autor, se han borrado las demarcaciones de la política interna, y las fuerzas globales del mercado han adquirido gran poder. Por lo tanto, se requiere que analicemos la rendición de cuentas más allá del Estado-nación, si no queremos que la democracia se debilite. Opina asimismo que las agendas de las instituciones multilaterales las definen los Estados más poderosos (Held, 2006: 304), por lo tanto, los demás países cuestionan su legitimidad.

Según este analista, las funciones democráticas del Estado están limitadas por hallarse incrustadas en el Estado-nación soberano. Considera que la democracia cosmopolita necesita un marco alternativo de empoderamiento y autonomía, basado en una confederación democrática constitucional global. Esta última debe incluir no solamente a las comunidades inmediatas, sino a todas aquellas cuyos destinos están entrelazados en redes económicas, políticas y ambientales. En la democracia cosmopolita se crearán nuevas instituciones que convivan con el Estado-nación, pero que estarán por encima del mismo en caso de que se demuestre que alguna política o conflicto tiene consecuencias transnacionales (Held, 2006: 305). También se refiere a la necesidad de que se organice una Convención Global Constitucional, que involucre tanto a los diferentes Estados como a las ONG, es decir, a la sociedad civil y a los gobiernos, para que a través de un proceso global de deliberación sea posible crear un marco legítimo para una gobernanza global sustentable y con rendición de cuentas (Held, 2006: 306). Esto se requiere ya que la globalización no solamente ha acercado a las comunidades sino que también ha originado nuevos conflictos. El crecimiento del multilateralismo y del derecho internacional, sin duda, ha creado un ancla cosmopolita para el mundo, pero no ha sido suficiente; es necesario avanzar más allá, para lograr un sistema mundial más justo, democrático y equitativo a partir de estas nuevas instituciones de la gobernanza global.

En su opinión, la idea tradicional del Estado democrático, en donde existen elecciones, electores y comunidades políticas bien definidas, las cuales participan y sustentan derechos y obligaciones claramente delimitados e íntimamente ligados a un determinado territorio político, resulta anacrónica en tanto que las conexiones locales, regionales y globales exigen una nueva definición de comunidad relevante (Held, 1995: 73). Este autor pugna por un régimen democrático con instituciones deliberativas y participativas que garanticen la cooperación global en una democracia cosmopolita (Held, 1995: 278).

De acuerdo con Jacques Attali: “Para el siglo XXI se anuncia la victoria de la democracia y su extensión indefinida a todos los ámbitos de donde ahora se ve excluida” (Attali, 2007: 100); sin embargo, es necesario que surjan cada vez más nuevas asociaciones, que a su vez utilicen las nuevas tecnologías, con lo que se redefinirá la participación ciudadana y esto dará lugar a nuevas formas de democracia. Explica que el libre mercado requiere, para su propia reproducción, del libre tránsito de mercancías y de la complementariedad de los procesos de producción, por ello se necesita cada vez menos de las fronteras, que son, en el marco geográfico, uno de los espacios donde se asienta la democracia, por lo que esta última podría correr algunos riesgos (Attali, 2007: 101). Es decir, en caso de que se eliminara el estatuto del Estado nacional con fronteras, las democracias podrían debilitarse.

En la búsqueda de una democracia con o sin fronteras, son necesarias la creación de las instituciones nacionales e internacionales adecuadas, así como la deliberación constante entre ciudadanos universales: ¿dónde votarán los individuos?; quizá en donde se vean afectados por las decisiones, independientemente de su lugar de origen. Attali ha propuesto una democracia virtual, alejada de los límites del territorio nacional y atemporal, en la medida en que se deben considerar también los derechos de las generaciones futuras (Attali, 2007: 102). El objetivo es consolidar y reforzar una democracia universal, y sólo reconoce en ese camino a la Unión Europea, una región que está en la ruta de construir una “unión federal democrática”, con sus debidas instituciones, que rebase los límites de su burocracia actual; por ello, la considera “un laboratorio de la democracia del futuro” (Attali, 2007: 103).

Como hemos visto, ciertos autores, como Putnam, Giddens y Held, consideran que la globalización ha exacerbado las tensiones estructurales, que no se habían observado en las democracias modernas, y aunque nadie predice su colapso, algunos sí piensan que han sido puestas a prueba. En este mismo

sentido, Joseph Stiglitz postula que actualmente existe un déficit democrático (Stiglitz, 2003). De acuerdo con este autor, las instituciones internacionales, como la ONU, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, están controladas por los países más poderosos, los cuales imponen a sus funcionarios. Sus dirigentes no son elegidos democráticamente por todos los países, sino que sus nombramientos los deciden las naciones más poderosas, es decir, no son autoridades representativas y no rinden cuentas a todos los ciudadanos, por tanto, estos líderes, que diseñan e instrumentan las políticas económicas globales claramente representan los intereses de los Estados-nación más poderosos (Stiglitz, 2006: 214). De acuerdo con este autor, la globalización ha mermado la soberanía de los países en desarrollo debido a que la toma de decisiones sobre aspectos fundamentales por parte de los ciudadanos se ha visto disminuida: “En este sentido, se ha limitado la democracia” (Stiglitz, 2006: 9), por lo tanto, propone que “puesto que el Estado-nación se ha debilitado, tienen que crearse instituciones globales democráticas que puedan manejar efectivamente los problemas que la globalización ha creado” (Stiglitz, 2006: 21). Es preciso consolidar una gobernanza global democrática. El déficit democrático también se observa en relación con los nuevos actores internacionales: las compañías transnacionales tienen más poder que varios de los más pequeños países del mundo —y que algunos no tan pequeños—, por lo tanto, no tienen la misma capacidad de negociación.

Roland Axtmann explica que con la globalización se expresa la tensión entre las premisas universales de la democracia y sus restricciones dentro de los límites conceptuales y territoriales de la soberanía del Estado-nación (Axtmann, 1996). La democracia hoy en día debería considerarse no en términos del ciudadano, sino de los derechos humanos, desligándose del concepto de soberanía territorial, esto es, reconstruyendo la concepción de democracia moderna. Antes se asumía que el Estado es el caparazón adecuado de la democracia. Unirlos, según la visión cosmopolita, nos lleva a la confusión analítica y a la contradicción, que impiden entender las consecuencias de la globalización en la democracia.

Los retos de la globalización, según los cosmopolitas, sólo se pueden enfrentar con estructuras regionales o globales para la acción colectiva democrática. Los déficits democráticos proliferan debido a que las organizaciones internacionales están controladas por los países más poderosos, aunque se pueden solventar al sujetar los regímenes de la gobernanza global a normas

y controles democráticos. Ian Bremmer nos previene de que “la democracia se debilita cuando un gran número de las decisiones que gobiernan la vida de la gente las toman personas que no son elegidas dentro de las fronteras de sus países” (Bremmer, 2018a: 164).

En una vena similar, John Burnheim considera que no es necesario el Estado-nación para realizar la democracia, ya que es posible que cada persona o grupo persiga por sí mismo sus intereses y preferencias en negociaciones, competencia y cooperación con otros a través de una red de autoridades democráticas (Burnheim, 1985).

Para Ann Florini, debe entenderse la gobernanza global como la forma en que diversos grupos de personas toman decisiones colectivamente, junto con los propios gobiernos, los cuales también forman parte de esta gobernanza. La democracia global tiene dos requisitos: “Un sistema que provea a la gente con una voz en la toma de decisiones que los afectan, y un mecanismo para que los representantes rindan cuentas a los representados” (Florini, 2005: 15). La autora explica que el concepto de Estado-nación que surge a partir de la paz de Westfalia, como solución a los conflictos religiosos, no necesariamente es tan claro hoy en día, porque en realidad los Estados están generalmente conformados por varias naciones, cuando las identificamos como etnias (Florini, 2005: 50). La globalización ha provocado nacionalismos de tipo étnico; es quizá por ello que estos grupos no ven reflejados sus intereses en los límites geográficos del Estado. El dilema actual, de acuerdo con ella, consiste en que, dados los problemas globales, se requiere una acción colectiva transnacional, y en este sentido los nacionalismos surgidos no la facilitan (Florini, 2005: 55).

Cada vez son más las demandas de los grupos, razón por la cual hay una necesidad cada día mayor de cooperar para resolver los problemas globales: se requiere de una acción colectiva transnacional; sin embargo, generalmente las grandes decisiones internacionales las toman casi exclusivamente los países más poderosos: “El grado alcanzado de democracia y de rendición de cuentas en el mundo existe fundamentalmente en el nivel nacional” (Florini, 2005: 84).

La libertad de información y la transparencia que puede proveer la internet, la así llamada supercarretera de la información, brindan esperanzas en este sentido. Al incluir a grupos anteriormente marginados para participar en las acciones colectivas pueden surgir nuevas formas de acción democrática: “Si la democracia quiere sobrevivir a la globalización debe atender el

libre flujo de la información” (Florini, 2005: 16). La tecnología puede permitir una mayor transparencia en las decisiones del gobierno y a partir de ella es posible exigir una mejor rendición de cuentas; no obstante, para que esto sea posible es necesario un fortalecimiento de la sociedad civil, el actor social encargado de formular estas demandas a los gobiernos legítimos. La nueva gobernanza que se requiere debe incluir a los nuevos actores internacionales y basarse en la necesidad de una amplia transparencia, que hoy en día resulta muy viable gracias a los avances tecnológicos. Cuando escribió lo anterior, Florini tenía mucha esperanza en las nuevas tecnologías; no pudo prever la polarización y las prácticas de desinformación que traerían consigo poco después: un desorden informativo que, paradójicamente, provocaría el debilitamiento de los sistemas democráticos.

Por otra parte, Michael J. Sandel nos recuerda el significativo descontento, a pesar de todo, que existe respecto de la democracia (Sandel, 1998). Apunta que las sociedades de hoy han cambiado en gran forma: “[...] vivimos en una sociedad continental con gran movilidad, que tiene mucha diversidad. Más aún, esta vasta sociedad no es autosuficiente, sino que está situada en una economía global cuyo violento flujo de dinero y bienes, información e imágenes, pone escasa atención a las naciones, y menos aún a las vecindades” (Sandel, 1998: 317). Asimismo, explica que a lo largo del periodo de los años setenta a los noventa del siglo xx se produjo una gran concentración de la riqueza en el decil superior de la población, el cual acaparaba el 45 por ciento de los bienes y recursos del planeta. La globalización y esta concentración de la riqueza requieren de una gobernanza transnacional, pero es importante comprobar si esta posibilidad logra obtener la lealtad e identificación de los individuos, es decir, si consigue incorporar la cultura moral y cívica que todas las democracias requieren (Sandel, 1998: 327-339). En otras palabras, para que las instituciones funcionen resulta imprescindible que las personas a las que rigen se identifiquen con ellas y, por lo tanto, las respeten y cumplan sus disposiciones.

El mismo politólogo explica: “La pérdida de poder por parte del Estado-nación en relación con la economía global puede ser el origen del descontento que aflige no sólo a la política estadounidense sino a otras democracias del mundo” (Sandel, 1998: 339); sin embargo, indica que la respuesta a esta cuestión no debe consistir en la formación de un Estado global basado en la solidaridad humana: “La esperanza del autogobierno reside no en relocalizar la soberanía sino en dispersarla” (Sandel, 1998: 345). No se trata de llevar la soberanía

y la ciudadanía hacia arriba sino de fomentar una gran variedad de comunidades y cuerpos políticos (Sandel, 1998), es decir, en contra de los pensadores cosmopolitas, que imaginan una gobernanza mundial, este autor propone una dispersión de las soberanías.

En su opinión, los seres humanos dan sentido a sus vidas a través de narrativas, y es justo con base en una de naturaleza política como proveen de sentido a la vida en comunidad, una en la cual se delibera sobre las metas sociales. Aun con los cambios globales puede no surgir una narrativa global, y es entonces cuando los grupos suelen recurrir a la fragmentación, lo que podría impedir que surja una vida cívica virtuosa, que sin duda se requiere para las democracias (Sandel, 1998).

La democracia cosmopolita la defienden algunos autores que piensan que este sistema político se debe instaurar en todo el mundo. Sostienen que es necesaria una gobernanza democrática mundial en la cual ya no habrá ciudadanos de los Estados-nación, sino del mundo. Se protegerán así los derechos humanos de todos los hombres y mujeres sin importar su raza, etnia, cultura o religión.

Su idea es procurar que el sistema democrático se propague en el mundo en tanto que es la mejor forma de organización política, a pesar de todos sus defectos. El problema con los cosmopolitas es que terminan por proponer un gobierno mundial, el cual maximizaría muy probablemente el asunto de la concentración del poder, que podría darse en forma desmedida. La distancia entre los diversos actores políticos y sociales y el gobierno tornaría muy compleja la democracia, incluso con el riesgo de caer en el totalitarismo. Ian Shapiro argumenta: “Cualquiera que sea la explicación de la mala distribución [económica] parece poco plausible que, con la creación de un sistema político mundial, se pudiera hacer algo para aliviarla. Por el contrario, las dificultades de imponerlo [el gobierno mundial] y los obstáculos [muy probables] para que la acción colectiva pudiera hacer cambios dentro de tan grande entidad, seguramente se multiplicarían” (Shapiro: 2011: 163). Por todo ello, consideramos que no se sostiene la pretensión de los cosmopolitas de abolir al Estado-nación, así como tampoco la de ampliar la ciudadanía a una de carácter global.

En este sentido, Shapiro más bien propone una gobernanza que fortalezca las instituciones internacionales y al derecho internacional, muy en sintonía con la proposición kantiana contenida en la idea de la “paz perpetua”. También, desde luego, apoya consolidar las instituciones locales, sobre

todo para la toma de ciertas decisiones concretas; es decir, está de acuerdo con el afianzamiento del poder subnacional y no nada más con la vigorización del supranacional.¹

La mayoría de los autores cosmopolitas descartan, en su afán por acercarse a la democracia ideal, el papel que ha jugado el Estado-nación; no obstante, defendemos aquí la firme convicción de que, a pesar de las diversas historias de cada Estado-nación, que han sido producto de imposiciones territoriales arbitrarias y/o de violentos enfrentamientos entre distintos grupos y etnias, a la fecha este sistema de ejercicio del gobierno y de cohesión de la organización social es todavía el más eficiente de los caparazones políticos. Para bien o para mal, en general los diversos Estados-nación han logrado comprender y capturar el descontento y los deseos de sus ciudadanos, y por consiguiente la mayoría de ellos ha decidido emprender los cambios correspondientes. Aunque también, desafortunadamente, algunos los han reprimido, lo cual les ha ocasionado graves consecuencias con el paso del tiempo. Lo cierto es que los avances que han obtenido, por ejemplo, las minorías étnicas y religiosas, las mujeres o la comunidad LGTTTIQ+, han ocurrido dentro de la arquitectura institucional del Estado-nación. Los progresos democráticos en el mundo tuvieron lugar, todos, en el marco político y social del Estado-nación. Por ello, la pretensión de “superar” esta institucionalidad política en aras de la creación de un Estado mundial, o de una gobernanza superpoderosa globalizada, no puede sino engendrar serias dudas. Por ejemplo, siquiera imaginar la rendición de cuentas de las potenciales enormes burocracias que algo así generaría resulta, por decir lo menos, problemático.

Atemperar la globalización

Consideramos que una de las propuestas más interesantes para garantizar la permanencia de la democracia a pesar de la globalización es la del economista Dani Rodrik, en su libro *The Globalization Paradox. Democracy and the Future of the World Economy* (2011). Este autor se preocupó, desde inicios del siglo, por los efectos negativos que el comercio internacional ocasiona en

¹ Un excelente estudio sobre los actores subnacionales en la gobernanza internacional en la región de América del Norte, con énfasis en las relaciones entre los estados de Estados Unidos y las provincias de Canadá se encuentra en Roberto Zepeda (2019).

los mercados de trabajo y en las políticas sociales. En su opinión, “el *outsourcing* podría exacerbar las desigualdades, incrementar los riesgos del mercado de trabajo y erosionar el pacto social en el interior de las naciones” (Rodrik, 2011: x). Otros factores desestabilizadores que se aunaron en este proceso fueron la desregulación financiera y el exceso de hipotecas no supervisadas, durante la burbuja del sector inmobiliario, todo lo cual desembocó en la crisis de 2008-2009. Considera Rodrik que la argumentación de los economistas neoliberales sólo se centraba en exaltar los grandes beneficios de la globalización y nunca analizaron sus posibles impactos negativos. Por lo tanto, sostiene, hoy en día la narrativa globalizadora ha perdido su atracción y credibilidad iniciales, lo cual pone en evidencia la necesidad de formular una nueva.

Sin duda, con la globalización se ha conseguido generar más riqueza y la pobreza ha disminuido a escala mundial, pero esto no ha ocurrido en forma equitativa. Como hemos comentado, las clases medias crecieron exponencialmente, a gran velocidad, en India y China, quizá las dos naciones más beneficiadas por el proceso globalizador, cuyos gobiernos marcaron con firmeza el tipo de desarrollo económico al que aspiraban. Por otro lado, sin embargo, pudo observarse una incontenible tendencia a la concentración de la riqueza, al grado de que, como lo señala Thomas Piketty, tan sólo el 1 por ciento de la población mundial detenta la mayoría de los recursos, sobre todo en Estados Unidos.

Piensa Rodrik que si queremos transitar por un camino de consolidación del sistema democrático tenemos que elegir entre el Estado-nación y la integración económica internacional. De forma similar, si pretendemos mantener el Estado-nación y su autodeterminación (o soberanía) debemos optar entre perfeccionar la democracia o profundizar la globalización (Rodrik, 2011: xix). En este sentido, sostiene que “la democracia y la determinación nacional deben controlar la hiperglobalización. Las democracias tienen el derecho de proteger sus arreglos sociales y cuando este derecho choca con los requerimientos de la economía global, es esta última la que debe ceder” (Rodrik, 2011: xix). Aunque suene atractivo imaginar una gobernanza mundial, ésta es imposible en la actualidad; por lo tanto, la democracia debe quedar anclada en el Estado-nación (Rodrik, 2011: 208).

Las grandes diferencias económicas

El profesor de la Universidad de Princeton, Sheldon Wolin, un importante crítico del sistema político estadounidense, argumenta “que la democracia en Estados Unidos nunca ha estado verdaderamente consolidada. Algunos de sus elementos clave no se han materializado o se mantienen vulnerables; otros han sido explotados con fines antidemocráticos” (Wolin, 2008: 14). Este autor percibe, desde 2008, un gran descontento de la ciudadanía por el rumbo del país, un fuerte desencanto con los medios de comunicación y una creciente desconfianza en los resultados electorales. Estas reacciones tienen su origen en temas controvertidos, como la guerra anticipada de Irak, declarada con base en mentiras, el escándalo ante el uso de la tortura por parte de los servicios estadounidenses de inteligencia, las revelaciones sobre espionaje interno y en general los cada vez más numerosos casos de corrupción tanto en la política como en el sector privado (todo ello en referencia a la administración del presidente George W. Bush).

En su opinión, la democracia constitucional corre peligro cuando se juega el rol de “superpotencia”. Es decir, se proyecta la autoridad hacia afuera y, en consecuencia, se convierte en un poder que no respeta las restricciones, que trata de imponer su voluntad, transformándose en un totalitarismo invertido (Wolin, 2008: 17). Un poder mediante el cual el gobierno tradicional se une en una relación simbiótica con el liderazgo de las corporaciones. Los grandes monopolios y las empresas multinacionales han mostrado ya su gran alcance en términos de ejercicio del poder. Las grandes corporaciones y el gobierno identifican sus intereses globales comunes y el resultado es una concentración del poder sin precedentes. Se crea “una identidad colectiva imperial más que republicana (en el sentido del siglo XVIII), menos democrática” (Wolin, 2008: 19). El pueblo ya no puede realmente controlar su destino, alejándose así del autogobierno y acercándose a “una democracia dirigida, la cara sonriente del totalitarismo invertido” (Wolin, 2008: 19).

Explica el autor: “El superpoder es la unión del Estado y las corporaciones en una era de decadencia de la democracia y de analfabetismo político” (Wolin, 2008: 189). La idea de democracia se ha tornado simplemente “retórica dentro de un sistema político cada vez más corrupto”. El imperio consiste en la actualidad en el afianzamiento del poder militar en el mundo a través de ventas de armas y alianzas comerciales con países más débiles, creándose

así mercados en los que dominan sus propios intereses económicos imperiales. Entrelazan la ciencia, la tecnología y el capital para expandir el imperio, aunque echan mano también de un poder suave, al pretender ejercerlo a través de productos y otras manifestaciones culturales.

Esta retórica de la política imperial la enfatizan, en el ámbito de la política exterior, los políticos, la elite militar, las corporaciones y los intelectuales de los *think tanks*. En ocasiones esta política externa sin límites se reproduce también en la interna, afirma el profesor de Princeton, como ocurrió durante el gobierno de George W. Bush. El sistema económico también afecta las relaciones de poder y, por lo tanto, a la democracia. Al realizarse una alianza tan íntima entre el poder corporativo y el Estado se ignoran los límites del gobierno y los gobernantes se alejan de la democracia (Wolin, 2008: 197).

Es fundamental que todos (los ciudadanos) defendamos las instituciones democráticas en tanto que las decisiones de los representantes tienen consecuencias sobre el conjunto de la población, y en este sentido deben ser aprobadas por todos los habitantes. Es preciso, definitivamente, considerar la cultura popular, sostiene Wolin, pero no “en su sentido contemporáneo de placeres estándares para un consumidor eternamente adolescente” (Wolin, 2008: 198), sino concebir la cultura en el sentido de cuidar las instituciones y tradiciones que atañen a todos. Añade: “El ideal de una cultura política democrática estaba referido a la cooperación en el cuidado de los mecanismos comunes, de las prácticas en las cuales todos, potencialmente, podrían tomar parte en las decisiones sobre los usos del poder, haciéndose responsables, al mismo tiempo, de las consecuencias de esas decisiones” (Wolin, 2008: 198). En contraste, en la cultura corporativa que hoy impera, la corporación está por encima de cualquier interés general, y es éste el “rostro más feo” del capitalismo imperial.

Actualmente, el representante popular que gana una elección es el que logró conseguir más recursos económicos, por lo tanto, “el candidato está en deuda con el poder corporativo incluso antes de asumir el cargo” (Wolin, 2008: 201) En otras palabras, de cierta manera la democracia, a nivel interno, se ha logrado moldear mediante la obtención del apoyo de los ciudadanos aunque, en forma paradójica, evitando que realmente gobiernen, obteniéndose así, más bien, un totalitarismo invertido, que incluso propició que los líderes políticos llegaran a postular la necesidad de exportar la democracia.

De acuerdo con Wolin, hoy en día las elecciones, como mito original, han sustituido a la participación. Lo delicado de esta situación es que se asume

que se tienen que aceptar todas las decisiones políticas legitimadas por el proceso electoral, aunque no se haya votado por el ganador. Más aún: los ciudadanos como conjunto no tienen ningún impacto sobre las decisiones del poder instituido.

También asegura este autor que, en una época en que existen diferencias de clase más marcadas y en la cual el agresivo Estado-nación necesita más controles para funcionar adecuadamente, el sistema democrático no resulta eficaz. Son la constante amenaza del terrorismo y de las guerras frecuentes de todo tipo, ya sean militares o comerciales, geopolíticas o ideológicas, los factores que facilitan las explicaciones simplistas. Paradójicamente, surge un Estado poderoso y una democracia fracasada (Wolin, 2008: 361). Para este pensador, “la democracia tiene que ver con las condiciones que le permiten a la gente común mejorar sus vidas, convirtiéndose en seres políticos, y logrando que el poder permanezca atento a sus esperanzas y necesidades” (Wolin, 2008: 362).

Al analizar la información que se publicó para justificar la guerra de Irak, este profesor sostiene que para una democracia es fundamental que sus dirigentes siempre hablen con la verdad, pues las mentiras tienen un terrible efecto destructivo. Existe desafortunadamente una cultura política donde el engaño se torna algo normal, afirma refiriéndose a la administración de George W. Bush y sus falsedades acerca de las armas de destrucción masiva y sobre el calentamiento global.

Agrega: “Si la democracia tiene que ver con la participación en el autogobierno, su primer requisito es una cultura que la respalde, un complejo de creencias, valores y prácticas que nutran la igualdad, la cooperación y la libertad” (Wolin, 2008: 363). El diálogo político, en su opinión, ha adquirido un nivel tan bajo y tan alejado de lo cotidiano que los ciudadanos, apáticos, evalúan tanto al Partido Republicano como al Demócrata de forma muy negativa. Considera que no se trata de volver al “originalismo” en busca de la democracia pura, y al analizar los avances históricos en este tema, descubre que “la democratización estaba asociada con un esfuerzo consciente por deshacerse del pasado y desafiar al presente con la visión de un futuro del cual no hay ningún precedente” (Wolin, 2008: 384).

La instauración y consolidación de las instituciones democráticas se logran a través de las contiendas democráticas, puesto que existe una tendencia histórica de que sean los “pocos” quienes monopolicen el poder. Esto se debe a que son ellos los que cuentan con el tiempo, los recursos y las habilidades

para imponer su voluntad. En contraste, “los muchos” no actúan coordinadamente y se concentran sobre todo en la lucha por la sobrevivencia cotidiana (Wolin, 2008: 384). Finalmente, este teórico de la política resalta la relevancia de reflexionar acerca de la “comunidad”, lo que para él significa que existe una preocupación “común” sobre el destino del sistema de gobierno (Wolin, 2008: 399). Los ciudadanos tienen que participar y encontrar en las empresas comunes una autorrealización que los haga actuar como un *demos*. Lo importante es evitar las justificaciones que impulsan las llamadas “razones de Estado” y preferir los razonamientos comunitarios. En este sentido, la democracia local resulta fundamental en esta tarea, pues es la que puede eliminar la gran distancia entre el gobierno representativo y su electorado.

Otro importante filósofo político, Christopher Hayes, argumenta: “De 1999 a 2010 el salario de los hogares cayó 7 por ciento. Más estadounidenses están en una movilidad hacia abajo que en ninguna época reciente de que se tenga memoria” (Hayes, 2012: 1). En contraste, de 1947 a 1970 el salario real creció para todos, sobre todo el del 20 por ciento más pobre (Hayes, 2012: 219).

En su opinión existe una disfunción de las instituciones y se ha perdido la confianza en ellas, así como en el gobierno, porque trabajan para las grandes corporaciones. El electorado se siente profundamente alejado de sus representantes: observa el claro fracaso de la elite político-económica por corrupta e ineficiente, por ello los ciudadanos pueden llegar a abrazar el autoritarismo.

Desde 2012 este autor observó cómo, en ciudades como Detroit, el desempleo real ascendió al 50 por ciento, y cómo ya desde 2010 empezaba a generarse en la clase trabajadora un sentimiento de enajenación, de enojo, de haber sido traicionados por las elites globales que manejan la nación (Hayes, 2012: 7-8).

La crisis de confianza en la autoridad es uno de los mayores problemas que este investigador encuentra; para probarlo, recurre a las encuestas de Gallup y del Pew Research Center sobre la confianza en las instituciones en general, las cuales muestran índices bajísimos (Hayes, 2012: 10-13). Explica la causa de esta crisis en las “[...] tres décadas de desigualdad acelerada [que] han producido un orden social deforme y un conjunto de elites que no puede evitar ser disfuncional y corrupto” (Hayes, 2012: 16); una crisis que claramente mostró la estrecha vinculación entre Wall Street y el gobierno.

Si bien observa varias razones por las que se genera la desigualdad, como la globalización, la tecnología, la corrupción del sistema financiero de las campañas políticas, el éxito de la guerra en contra de los sindicatos, en su opinión

fue la desmedida fe en la meritocracia por parte del pueblo estadounidense la verdadera culpable (Hayes, 2012: 22).

En el fondo, la tendencia general es a creer que las desigualdades económicas se deben a las diferencias en los talentos; es por esto que no se busca la igualdad social sin más, sino que sólo se persigue la igualdad de oportunidades, aunque el resultado muestre la creciente acumulación de los recursos en pocas manos. Nos advierte este pensador que “la democracia no cancela la posibilidad del gobierno de las elites” (Hayes, 2012: 139). Esta tendencia ha provocado una alarmante concentración de la riqueza: “El 1 por ciento de la población es dueño de una cuarta parte del *pastel* económico. La última vez que su porción fue así de grande sucedió con anterioridad a la crisis del 29 [...]. El multimillonario dueño de un fondo financiero, John Paulson, ganó en sólo una hora 2.4 millones de dólares en 2010” (Hayes, 2012: 142). Por otra parte, no sólo los republicanos han instrumentado la política de reducción de impuestos para los más acaudalados; también los demócratas, como Barack Obama, lo hicieron. Asimismo, las instituciones financieras internacionales exigen, para otorgarles préstamos, a los países con crisis económicas, que reconstruyan su pacto social en la dirección neoliberal que ellas mismas les imponen, normalmente de extrema disciplina macroeconómica y de una austeridad exagerada en el gasto (Hayes, 2012: 144).

Hayes argumenta que mientras se supone que las democracias deben actuar conforme a la lógica de que cada ciudadano cuenta con un voto, en realidad los intereses de los más ricos pesan más ante los representantes. Esto ha causado malestar entre muchos grupos sociales: profesores universitarios, jóvenes con deudas contraídas para su educación, trabajadores, clases medias, e incluso los miembros del movimiento conocido como el Tea Party (Hayes, 2012: 146). La mayoría de los estadounidenses se sienten relegados, traicionados, y están muy enojados.

Sin embargo, solamente a través de los impuestos regresivos se puede ayudar a evitar las grandes desigualdades. La democracia no es un equilibrio estable; es necesario que surjan en su seno luchas populares para llegar a un arreglo social más igualitario. Es indispensable que se fortalezca la innovación institucional, y para ello la internet puede ayudar, pues es un avance tecnológico que impulsa naturalmente la descentralización del poder, evitando que se concentre en las manos de una elite (Hayes, 2012: 239). Hayes pugna por una “tercera era” de igualdad en una sociedad dinámica: “La igualdad nun-

ca es un estado final; la democracia jamás consiste en un equilibrio estable, [ambas] son procesos, son luchas” (Hayes, 2012: 24).

Poder político de las elites económicas

Recientemente, Francis Fukuyama se ha vuelto a enfocar en el tema de la democracia, pero ahora no tiene una visión tan positiva sobre ella. Explica que Estados Unidos inició, desde hace doscientos años, la institucionalización de su propio sistema democrático, y que es precisamente esta circunstancia la que provoca el problema actual de su sistema político. Si bien se trata de uno ampliamente legitimado, hoy en día se ha producido un significativo descontento con sus instituciones, las cuales, en su opinión, están en decadencia. En los tiempos modernos no basta que un régimen sea democrático, tiene también que lograr buenos resultados en las diversas áreas de la administración pública, y para poder responder a las nuevas demandas de la población, requiere que sus instituciones sean flexibles (Fukuyama, 2014: 201). Las instituciones son reglas de comportamiento creadas para una situación histórica determinada. Al cambiar las condiciones socioeconómicas de una nación, las instituciones tienen que readaptarse o, de lo contrario, su rigidez se torna un obstáculo para el buen desempeño del gobierno. Por otra parte, muchas de estas instituciones han sido capturadas por los poderosos intereses privados, lo que explica el descontento pues, por un lado, los poseedores del dinero aumentan así su poder y, por el otro, se intensifica la rigidez de las reglas institucionales.

Según Fukuyama, el orden político tiene tres instituciones fundamentales: 1) el Estado, 2) la aplicación del derecho y 3) los mecanismos democráticos que permitan la rendición de cuentas. Sólo la democracia liberal puede lograr un equilibrio entre estos tres elementos (Fukuyama, 2014: 541). Es fundamental que esto se consiga alcanzar, pues de lo contrario el sistema se torna ineficiente.

Al centrar su estudio en el desarrollo del Estado, este autor sostiene que la sociabilidad humana está basada en la selección del clan y en el altruismo recíproco dentro del mismo —lo que supone la preferencia por ayudar a familiares y amigos (Fukuyama, 2014: 464)—. Así pues, las primeras formas de gobierno fueron creadas en torno al clan, a los parientes; se constituyeron entonces los llamados gobiernos patrimoniales.

En contraste, el Estado moderno promueve el gobierno impersonal con el objetivo de impedir que los funcionarios públicos privilegien sus intereses personales y los de sus amigos y familiares. Idealmente, se aspira a que los empleados gubernamentales realicen sus funciones con la única finalidad de promover el llamado bien común.

Sin embargo, recientemente se ha producido en Estados Unidos un importante retroceso: Fukuyama considera que las elites han formado redes de amigos y familiares para proteger sus intereses personales. Para ello utilizan a los grupos de interés, lo cual les confiere un mayor poder para lograrlo; de algún modo se puede decir que capturan al Estado, esto es, se origina una “repatrimonialización”. Esta situación implica que los gobernantes no responden a las demandas de la población en general y, por lo tanto, pierden legitimidad ante la sociedad (Fukuyama, 2014: 27). Los grupos económicamente más poderosos de la economía de mercado utilizan sus amplios recursos de todo tipo para obtener una mayor influencia política. Desafortunadamente, por esta razón el estadounidense se ha convertido en un Estado patrimonial una vez más, y así se puede observar en la actualidad la existencia de una inmensa corrupción y de la influencia desmedida de los grupos que ostentan el gran poder económico dentro de su sistema legal (Fukuyama, 2014: 35).

Lo descrito ha conducido a una crisis de la representación, puesto que los grupos menos privilegiados no se sienten representados por el gobierno debido a que también son los menos organizados. En cambio, las elites cuentan con muchos recursos para movilizar a los grupos particulares en su beneficio y consolidar así su oposición o su apoyo a políticas que les puedan afectar o favorecer.

Los grupos de interés, nos explica Fukuyama, se organizan más fácilmente porque son más pequeños; en este sentido, se refiere al mismo problema de la acción colectiva al que se refirió Olson (1965). Es más difícil que se organicen los grupos de la población en general, que tienen escasa participación. Por lo tanto, las políticas públicas no representan la voluntad de las mayorías, esto es, de la mayor parte del electorado estadounidense (Fukuyama, 2014: 465).

Al analizar el sistema político de su país explica que las personas crean las instituciones de acuerdo con ciertas condiciones histórico-sociales. Establecen normas y formas de actuar que facilitan la resolución de los conflictos; sin embargo, subraya que si las instituciones no se adaptan a los cambios de las condiciones sociales, entonces se tornan rígidas (Fukuyama, 2014: 27).

En consecuencia, en lugar de ayudar a resolver conflictos sociales impiden su solución y, más aún, originan otros problemas. Apunta que en la época actual, en que la sociedad estadounidense está muy dividida, sus instituciones se han hecho rígidas, y en lugar de facilitar las decisiones las obstaculizan.

La paradoja es que por el afán de construir un Estado más democrático se introducen muchos controles: “El resultado es que tanto el derecho como el procedimiento de rendición de cuentas se utilizan más bien para eliminar las metas sustantivas para las que originalmente se crearon” (Fukuyama 2014: 521). Hay mucha legislación y exceso de demandas en las cortes, así como una exagerada democracia en relación con la capacidad del Estado para responder a las demandas; los pesos y contrapesos han provocado que las ramas del gobierno se bloqueen entre sí y, por otra parte, el federalismo no delimita claramente las responsabilidades y funciones del gobierno federal y las de las administraciones locales, sino que duplica los múltiples niveles de la acción gubernamental (Fukuyama, 2014: 521).

Apunta este politólogo estadounidense que es justo ahora, cuando la sociedad estadounidense se encuentra más dividida, ya que los conservadores se han vuelto más conservadores y los liberales, más liberales, que toda esta arquitectura institucional promueve más el desacuerdo entre estos grupos, los cuales no están interesados en poner sobre la mesa posiciones moderadas y de consenso.

Fukuyama resume su postura asegurando que las fuentes de la decadencia del poder político de la actualidad son: la rigidez de las instituciones y la inmensa influencia de las elites, dos fenómenos que no sólo ocurren en Estados Unidos sino también en muchas otras naciones democráticas. Esta decadencia sucede cuando los actores políticos se consolidan en un determinado sistema y bloquean la posibilidad del cambio institucional. Finalmente, sostiene que las democracias liberales que mantengan un adecuado equilibrio entre la ley, el Estado y la rendición de cuentas son las que lograrán ser más justas (Fukuyama, 2014: 540). En su opinión, la democracia no es la trayectoria inevitable de todos los países; por el contrario, es preciso que los ciudadanos luchen día con día por su advenimiento y consolidación, y que quienes la proponen se preocupen más por imbuirle una nueva energía que por obstaculizar a los gobiernos autoritarios (Fukuyama, 2014: 524).

Para finalizar, enfatiza que la democracia liberal no es universal; sin embargo, florece cuando existe un alto grado de desarrollo y de modernidad

económica y social, porque en estas condiciones se exigen reglas más claras y mayor certidumbre (Fukuyama, 2014: 519). De hecho, sostiene que se trata, precisamente, del sistema político que a la fecha más ha logrado reducir la incertidumbre.

Sobre este tema del poder de las elites, el influyente teórico progresista Noam Chomsky, al analizar el mundo, se pregunta: “*Who rules the world?*” El autor explica que desde finales de la segunda guerra mundial, Estados Unidos ha dominado el mundo, aunque recientemente ha tenido que compartir ese poder con los que él ha llamado los “amos del universo”, que son los países que conforman el G7, los cuales dominan las principales instituciones internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio (Chomsky, 2016: 1). Si bien estas naciones pueden ser sistemas democráticos, están, sin embargo, lejos de representar a sus poblaciones, puesto que estas últimas tienen, en general, muy pocas posibilidades de lograr un impacto sobre sus decisiones políticas. En cambio, “Las elites económicas y los grupos organizados que representan los intereses de los negocios sí ejercen un impacto sustantivo independiente sobre las políticas del gobierno de Estados Unidos, mientras que el ciudadano medio y los grupos de interés de las masas cuentan con poca, o no tienen ninguna, influencia independiente” (Chomsky, 2016: 2). Las teorías que sirven como aparato explicativo para entender estas sociedades son las que se refieren a la dominación de las elites, o “pluralismo sesgado”, en tanto que, de hecho, los grupos de la población más vulnerados y desposeídos son excluidos del sistema político. Walter Dean Burnham y Thomas Ferguson sostienen que la mayoría de la población estadounidense está hastiada de los dos partidos políticos del sistema, aunque no alcanzan a visualizar otras perspectivas que valgan la pena. Noam Chomsky los cita en su libro: “Americans are sick to death of both parties. Why our politics is in worse shape than we thought?” (Chomsky, 2016: 2); es decir, los ciudadanos están decepcionados de los partidos porque no creen que realmente los representen. A los partidos los mueven, en realidad, los grandes intereses económicos.

Según Walter Dean Burnham, la significativa abstención que caracteriza a los procesos electorales se da, en parte, porque no existe un partido de los trabajadores que realmente proponga políticas para el beneficio de las masas. Por el contrario, ambas formaciones políticas se encuentran secuestradas por los grandes intereses económicos de Estados Unidos. En esta dirección

Chomsky agrega: “Los Estados obviamente tienen estructuras internas complejas, y las elecciones y decisiones de los líderes políticos están fuertemente influidas por las concentraciones internas de poder, mientras que la población en general es marginada” (Chomsky: 2016: 239). En su opinión, las políticas neoliberales han ocasionado la concentración del poder y, por lo tanto, han debilitado la democracia. Ya desde los sesenta del siglo xx, sus defensores querían atemperar los excesos de la democracia debido a los movimientos que tuvieron lugar en ese periodo, y hoy ven con buenos ojos la pasividad y la escasa participación imperantes. En resumen, Noam Chomsky describe un mundo gobernado por los intereses de las más grandes corporaciones globales, un planeta en el que las masas han sido excluidas de las decisiones fundamentales que afectan sus vidas, por lo tanto, nos encontramos inmersos en una época en la que la democracia ha sido debilitada.

Poderes de excepción del presidente

Por otra parte, el profesor Bruce Ackerman advierte sobre la que considera otra de las principales amenazas para el sistema democrático estadounidense. Se interesa fundamentalmente por los cambios en la Constitución, en este sentido, le preocupa que la retórica marcial permita al presidente invocar su rol de jefe de las fuerzas armadas (*commander in chief*) y exija sacrificios al pueblo por el bien de la nación (Ackerman, 2018: 221). Esta tradición ha existido a lo largo de la historia de Estados Unidos. Los presidentes pueden convocar a la “guerra contra el terrorismo”, la “guerra contra la pobreza”, la “guerra contra las drogas”. Con esta retórica se justificaron, por ejemplo, las torturas de prisioneros de guerra en Guantánamo, perpetradas por el ejército estadounidense.

Al profesor de Yale le preocupa la alta vulnerabilidad de las sociedades ante los constantes ataques terroristas en la época actual. Por lo tanto, estima que los poderes excepcionales presidenciales mencionados podrían utilizarse con mucha frecuencia, por eso recomienda un nuevo marco para “controlar un asalto presidencial de gran escala sobre nuestra tradición liberal democrática” (Ackerman, 2018: 223). La nueva iniciativa no debe permitir que el jefe de la nación disfrute de un poder unilateral para desatar guerras que nunca terminan: “Se debe crear un nuevo sistema de pesos y contrapesos, basado en la noción diferente y de sentido común de que un gran ataque terro-

rista previsiblemente va a crear un ‘estado de emergencia’, que garantice que las medidas extraordinarias se aplicarán solamente en el corto plazo, y que se darán los pasos decisivos que se requieran para garantizar que no permanecerán más allá del periodo obviamente necesario” (Ackerman, 2018: 225). Explica que esta reglamentación significa que se le otorgaría este poder al presidente sólo mientras el Congreso revisa, durante una o dos semanas, si realmente se justifica declarar un estado de emergencia. Tocaré al presidente persuadir al Congreso de que la situación requiere de dichas medidas extraordinarias. Sería necesario que convenciera a un 60 por ciento de los legisladores en ambas cámaras. Con el paso del tiempo, propone el autor, este porcentaje de representantes y senadores tendría que aumentar. Sería una especie de “escalador de supermayoría”, según sus palabras. Subraya, asimismo, la necesidad de recurrir a las ramas ejecutivas y legislativas del gobierno, y no sólo a los jueces, para crear un verdadero sistema de pesos y contrapesos (Ackerman, 2018: 228).

Este reconocido constitucionalista estadounidense ha insistido en colocar como una de las principales prioridades de la agenda política la necesaria promulgación de una legislación para acotar los poderes extraordinarios del presidente en situaciones de emergencia: “Nuestro reto del siglo *xxi* es responder al espíritu de los fundadores, y adaptar el principio de los pesos y contrapesos, de tal forma que los poderes de emergencia sean invocados [únicamente] cuando la seguridad pública lo requiera. Al mismo tiempo, debemos evitar que el ejercicio de autoridad extraordinaria destruya el mismísimo orden constitucional que la declaración de emergencia pretende proteger” (Ackerman, 2018: 231).

Claramente apreciamos que esa posición se incluye dentro del conjunto de concepciones de la democracia que considera fundamental e imprescindible el papel desempeñado por las leyes que la crean, la consolidan y la protegen. Este pensador es, quizá, el mayor defensor en la actualidad de ese marco constitucional, que es el instrumento político que en última instancia le da vida a la democracia estadounidense. En su opinión, precisamente a través de las reformas constitucionales se puede aspirar a una mejor democracia. En un análisis prospectivo sobre las condiciones actuales y las posibles situaciones que pudieran llegar a ocurrir, propone una nueva legislación que limite el poder del presidente, quien de acuerdo con la legislación actual podría hacer un uso excesivo de esa prerrogativa. Sin duda, Ackerman le otorga gran relevancia al principio de la mayoría, por ello la idea de incre-

mentar cada vez más el número de votos congresionales requeridos para declarar un estado de emergencia nacional. De esta forma impulsa la práctica de la deliberación como el mecanismo idóneo para juzgar y decidir sobre cada circunstancia específica.

En su libro *The Failure of the Founding Fathers: Jefferson, Marshall and the Rise of the Presidential Democracy* analiza dos momentos que considera críticos en la historia de Estados Unidos, desde el punto de vista de sistema legal. El primero, la llegada a la Presidencia de Thomas Jefferson como representante del Partido Republicano en una etapa en que el Congreso estaba dominado por los federalistas, y que constituyó el inicio de la competencia electoral entre dos partidos, el Federalista y el Republicano. Es bien sabido que los Padres Fundadores le temían a los partidos porque los consideraban facciones maliciosas que solamente fomentaban la polarización social y, por lo tanto, no deliberaron sobre ellos en la Convención Constitucional de 1787. Actualmente, de acuerdo con Ackerman, sería muy difícil pensar en elecciones sin asumir la existencia de los partidos, los cuales desarrollaron con el tiempo tanto sus plataformas ideológicas como sus capacidades organizacionales.

Antes de que asumiera el poder la nueva administración del primer presidente republicano, los federalistas hicieron una serie de nombramientos de jueces con el fin de conservar su influencia, lo que Ackerman (2005: 7) considera como un claro acto de asalto a la soberanía popular. En su opinión, el presidente contaba con un mandato popular, así que decidió echar para atrás estos nombramientos. El famoso caso *Marbury vs. Marshall* se trató, más que de considerar el poder de los jueces en contra de los políticos, de reconocer el mandato del pueblo.

Si bien el juez Marshall consideraba que al negar estos nombramientos se actuaba de forma inconstitucional, la Suprema Corte permitió que los jeffersonianos clamaran por un mandato del pueblo para dar un golpe al ideal de la independencia judicial. Jefferson llenó las vacantes con sus partidarios, para así poder realizar cambios constitucionales. El presidente argumentaba en favor de su derecho de hacer estos cambios porque contaba con un mandato del pueblo.

Los Padres Fundadores consideraban que para hacer cambios constitucionales, según el artículo v, era necesario entablar una negociación entre las asambleas locales y la federal. Para proponer enmiendas se requería que las apoyarían dos terceras partes del Congreso y, posteriormente, se precisaba que tres

cuartas partes de las legislaturas locales las aprobaran. Ahora bien, la victoria electoral de Jefferson le otorgaba un mandato que le permitía, sin duda, emprender cambios dentro del marco de la doctrina de la Ley Constitucional (Ackerman, 2005: 13). De acuerdo con este autor, la Constitución de 1787 se centraba en el poder del Congreso, pero ya para 1800 reconocía el debido lugar de la Presidencia y, de acuerdo con el triunfo nacional del partido de su titular, argumentaba que por ello contaba con un mandato popular (Ackerman, 2005: 245). Si bien en 1800 pudieron solucionar la crisis exitosamente, al contar adecuadamente los votos, su gran error fue no concretar una reforma constitucional que resolviera permanentemente este problema.

Según este autor, el sistema constitucional estadounidense trata de controlar la Presidencia plebiscitaria. En realidad no existe un sistema presidencial de Estados Unidos: “Todo lo que tiene es una larga historia en la cual los reclamos presidenciales de tener un mandato del pueblo han sido repetidamente frenados y reformados por las otras ramas” (Ackerman, 2005: 246).

Lo interesante de ese momento histórico fue que la Suprema Corte no trató de eliminar la nueva legislación propuesta por Jefferson, sino que le buscó un acomodo en el nuevo orden político en que empezaban a dominar los republicanos. Argumenta Ackerman que lo que se ha hecho a lo largo de la historia es simplemente parchar la Constitución, en lugar de emprender las debidas reformas constitucionales, lo cual ha provocado crisis políticas relevantes que, afortunadamente, han podido superarse: pone el ejemplo de cuando el vicepresidente Al Gore presidía el Senado y le tocaba a esta institución revisar la elección presidencial en la que el propio Gore competía contra George Bush Jr. Finalmente, correspondió a la Suprema Corte tomar la decisión y así superar una muy seria crisis de legitimidad de esos comicios; no obstante, nunca se llevó a cabo la muy necesaria reforma electoral para evitar que una situación parecida pudiera presentarse, con el riesgo implícito de que entonces una sociedad incluso más polarizada no aceptara fácilmente la decisión del Poder Judicial. Fue hasta 1933, con la enmienda 12, cuando se estableció que el Congreso tendría el poder de nombrar a un presidente interino, si el nuevo no hubiera sido designado para el día de la toma de posesión (Ackerman, 2005: 252).

Otro relevante y conocido caso de enfrentamiento entre la Suprema Corte y la Presidencia ocurrió cuando Franklin D. Roosevelt desafió a la primera con su *New Deal*: “Mientras que Jefferson trató de debilitar al gobierno fe-

deral al desmembrar el sistema judicial, Roosevelt optó por un camino centralizador, creando un poderoso aparato administrativo que intervino en nuevas áreas de la vida, anteriormente dominadas por los estados [federados]" (Ackerman, 2005: 254). Tanto en 1800 como en 1930, los jueces consideraron seriamente bloquear los cambios, resistiéndose a aceptarlos, aunque finalmente accedieron ante la enorme legitimidad del poder presidencial. De esta forma, reconocieron la soberanía popular del ejercicio presidencial: "En ambos casos la Suprema Corte sintetizaba lo nuevo con lo viejo, lo cual mantenía vigente el sentimiento de legitimidad" (Ackerman, 2005: 255). En este sentido, la Presidencia pudo dar voz e incluso abanderar los movimientos de cambio social.

El profesor de Yale cuya obra analizamos afirma que la Ley Nacional de Recuperación Industrial de 1933 (*National Industrial Recovery Act*, NIRA) fue el arma del *New Deal* con la cual enfrentaron la Gran Depresión, con un régimen centralizado de planeación industrial administrado por el Ejecutivo. Esta solución era muy contrastante con las ideas reinantes de libre mercado y derechos de autonomía de los estados. Los magistrados prefirieron reconocer una suerte de capitalismo regulado y aceptaron los nuevos programas sociales (Ackerman, 2005: 259).

Ackerman nos recuerda que aun cuando existe la posibilidad de una sola reelección, el presidente no tiene un mandato ilimitado ni facultades suficientes para cambiar la Constitución por sí mismo en nombre del pueblo estadounidense (Ackerman, 2005: 263), circunstancia que resulta de la mayor relevancia hoy en día, cuando los gobiernos populistas aseguran contar con el mandato del pueblo y, por ello, están dispuestos a atacar la legitimidad de las instituciones e incluso a destruirlas, olvidándose del diálogo que debe privar entre las ramas del gobierno, pues: "La Constitución no es una máquina milagrosa que funciona sola. Es un diálogo constante entre las expectativas inspiradoras de una generación y la experiencia del mundo de la anterior; entre las iniciativas visionarias de la soberanía popular y la sobria adaptación del estadista" (Ackerman, 2005: 266).

Debilitamiento de los partidos

Por su parte, dos influyentes pensadores contemporáneos, Frances M. Rosenbluth e Ian Shapiro (2018), abordan el tema de la importancia de los partidos

políticos para las democracias. Explican que, paradójicamente, mientras mayor descentralización del poder y más participación directa de los ciudadanos existe, la respuesta ha sido una menor confianza en los políticos, las instituciones y los partidos. A nivel mundial, es cada vez más visible el surgimiento de partidos políticos y candidatos que se manifiestan en contra del *establishment*.

Recientemente ambos han señalado la consolidación de dos tendencias: la concentración de la riqueza y el estancamiento de los salarios. Al mismo tiempo la población envejece, lo que conlleva sobrecargas fiscales debido al costo de los seguros de salud y a las pensiones. Estas razones los llevan a afirmar que: “La aparente paradoja es real: las reformas democráticas descentralizadoras desde los sesenta son una importante fuente de insatisfacción de los votantes” (Rosenbluth y Shapiro, 2018: 2).

El resultado, sostienen, es que este tipo de sistemas produce políticas públicas que no satisfacen a la mayoría de los votantes. Curiosamente, aunque en apariencia los electores tienen más control y se exige una mayor rendición de cuentas a los políticos y funcionarios, en realidad sucede todo lo contrario. La paradoja consiste, según ellos, en que al otorgarse más poder a las bases en el fondo lo que ocurre es que aumenta también su nivel de enajenación. Una explicación de este fenómeno podría hallarse en la voluntad de entender mejor a los partidos políticos, que son el corazón de la política democrática. Desafortunadamente, argumentan, en Estados Unidos los partidos políticos son débiles, a pesar de su relevancia, y, por supuesto, serían precisamente los partidos las instituciones que pueden proteger mejor los intereses de los grupos vulnerables de la sociedad.

Con la descentralización se le ha dado gran importancia a los *caucus* (grupos congresionales) y a las elecciones primarias, intrapartidistas, lo que ha provocado que algunos grupos muy activos, como el Tea Party, acumulen un poder desproporcionado. Las elites partidarias han perdido poder mientras que las bases se han fortalecido. Por esta razón los activistas políticos acaparan cada día mayor fuerza *vis-à-vis* las elites de los partidos; sin embargo, esto último trae como consecuencia que no sea viable una representación significativa de todos y cada uno de los intereses particulares: “Las democracias saludables dependen de que los partidos sean tanto fuertes como grandes” (Rosenbluth y Shapiro, 2018: 13). Idealmente, las organizaciones partidistas tratan de llegar a acuerdos de mayoría, sin favorecer en forma desmedida a ninguna minoría.

Es innegable que la globalización ha debilitado a los sindicatos, mientras que los grandes negocios globales se han fortalecido. Esta circunstancia ha provocado que la izquierda política se haya fragmentado al tiempo que los movimientos de derecha se han fortalecido en la forma de populismos. Apparentemente, de acuerdo con Rosenbluth y Shapiro, resultaría muy extraño que se demandara que existan instituciones jerárquicas para garantizar mayor democracia, pero sostienen que sólo así se pueden expresar los intereses de la mayoría de los votantes y no sólo los de las minorías más activas e intensas.

Los partidos se han vuelto más débiles debido, entre otras razones, a los cambios demográficos, así como por los incontenibles efectos del poder del dinero, pero también por el deseo de hacerse más democráticos: “Ningún gobierno le puede dar a todos todo lo que quieren. Hay ganadores y perdedores en todas las políticas que el gobierno adopta” (Rosenbluth y Shapiro, 2018: 26). Cuando los partidos escuchan más las voces del dinero que las de la mayoría de los electores, entonces el pensamiento populista y los partidos antisistema adquieren importancia.

Asimismo, cuando un solo partido se torna dominante se generan el clientelismo y la corrupción. Por ello, un sistema democrático con un solo partido puede ser tan problemático como uno con demasiados partidos: “Un sistema que le cumple a la mayoría de las personas casi todo lo que quiere la mayor parte de las veces puede, de todas maneras, fallarle a algunas personas todo el tiempo” (Rosenbluth y Shapiro, 2018: 42). Son precisamente estos últimos, los excluidos, quienes más susceptibles están a escuchar las voces de los populistas y de las organizaciones antisistema, y en consecuencia a apoyar sus plataformas políticas. Por el contrario, en los sistemas bipartidistas ambos partidos se esfuerzan en competir por el voto de las minorías.

Si bien es cierto que los dos partidos estadounidenses hegemónicos, el Republicano y Demócrata, se han movido ambos hacia la derecha en asuntos económicos, también lo es que se han alejado ampliamente entre sí en los temas sociales, de identidad y culturales. Además, las grandes diferencias socioeconómicas entre las zonas rurales y urbanas del país impiden que se conformen microcosmos territoriales de la política nacional.

Los Padres Fundadores de esa nación veían una ganancia en la fragmentación, pero no les gustaban los partidos. Así que aparte de concebir la división de poderes en las tres ramas del gobierno a nivel nacional, también la impulsaron en la escala local. Además, le agregaron al sistema político el

federalismo, arquitectura institucional que permite que cada estado federado tome diferentes decisiones respecto de las diversas políticas públicas. La décima enmienda a la Constitución de Estados Unidos delega la mayoría de las facultades gubernativas a los estados locales, excepto aquéllas explícitamente diseñadas para el gobierno federal.

En las elecciones primarias, internas de los partidos, es clara la tendencia creciente a elegir candidatos que se encuentran en los extremos del espectro ideológico de cada uno de ellos. Con el intento de acercar los métodos y los valores democráticos a la gente se tornó más difícil redactar plataformas partidistas coherentes. Fue justo esta circunstancia la que le facilitó a Donald Trump apoderarse del Partido Republicano, a pesar de que su elite tradicional no lo apoyaba, aunque finalmente tuvo que aceptarlo.

Por el contrario, en el caso del Partido Demócrata, sus superdelegados (grupo compuesto básicamente por los miembros del llamado *establishment* de la organización) consiguieron bloquear la candidatura del senador Bernie Sanders, un populista de izquierda, y respaldaron claramente la de Hillary Clinton. Ahora bien, si es cierto que Trump logró la postulación y la victoria electoral con el apoyo de un movimiento surgido de las bases del partido que lo nominó, las cuales respondieron a su narrativa populista de derecha, no es menos que su triunfo dista mucho, de acuerdo con estos autores, de ser verdaderamente democrático. Ganó gracias al sistema del Colegio Electoral, con 304 votos de sus miembros contra los 227 que obtuvo Clinton, a pesar de que esta última cosechó 2.8 millones de sufragios populares más que su adversario en la contabilidad nacional.

Rosenbluth y Shapiro (2018: 229) advierten que los movimientos antipartidos son peligrosos, ya que pueden minar los fundamentos de la democracia. Esto se debe a que se trata de movimientos sólo superficialmente democráticos, que debilitan la rendición de cuentas y, además, dado que normalmente fracasan en el cumplimiento de sus objetivos y promesas y no consiguen buenos resultados, la gente se desilusiona de la democracia misma: “Las personas que creen que a los partidos no les interesan los votantes son vulnerables a la demagogia populista” (Rosenbluth y Shapiro, 2018: 229). Los electores desafortunadamente rechazan por lo general los resultados de los partidos débiles y tratan de castigarlos aún más, un comportamiento que podría no ser el adecuado.

Los partidos en Estados Unidos son débiles por causa del presidencialismo, el federalismo y su sistema de elecciones primarias, que ocasiona que los

políticos tengan que rendir cuentas con mucha frecuencia a los votantes más activos y a los donantes más ricos en los niveles locales; que deban comprometerse a impulsar una gran cantidad de proyectos y a apoyar la aprobación de leyes también en el ámbito estatal, lo que tiene como consecuencia que se reduzcan significativamente los recursos para los proyectos nacionales de salud, educación o infraestructura (Rosenbluth y Shapiro, 2018: 233). En este sentido, las tradicionales y más o menos definidas posturas de derecha e izquierda se han fragmentado mucho y se ha generado mucha xenofobia.

Los partidos políticos en Estados Unidos son débiles, asimismo, por su incapacidad para impulsar proyectos propios o crear políticas públicas exitosas en los temas que realmente interesan a la mayoría de los ciudadanos. Difícilmente en la actualidad los partidos logran, una vez en el ejercicio del poder, que el Ejecutivo y el Legislativo federales trabajen conjuntamente para llevar adelante sus programas partidistas.

Política neoconservadora: exportar la democracia

Los neoconservadores propusieron como un asunto central de la política exterior exportar la democracia. Basados en la premisa de la existencia de valores universales, pugnaban por instaurar el sistema democrático en otros países, algunos con muy diversas culturas. Más que cuestionar aquí la validez de dicha pretensión, sostenemos que las democracias no sólo no pueden imponerse desde arriba, sino que es preciso que se arraiguen en la vida cotidiana, asimismo democrática, de la ciudadanía, que pueda adoptar la vigencia de una infraestructura institucional democrática. Resulta por lo menos paradójico tratar de imponer la democracia. En este sentido, nos interesa conocer el pensamiento de Condoleezza Rice, quien no sólo ha sido una reconocida académica, sino que fue también una importante forjadora de la política exterior de Estados Unidos.

Rice combate la idea de que la democracia está en retroceso y, por el contrario, argumenta que es patente el deseo de la gente de gobernarse a sí misma. Explica que la democracia es el único sistema de gobierno que defiende el derecho a la libre expresión de las personas, así como su libertad ante el poder arbitrario, y al mismo tiempo les solicita su consentimiento para ser gobernados (Rice, 2017: 6). La democracia combina la estabilidad con el cam-

bio. Y si bien es un sistema frágil e imperfecto, tiene la virtud de, a través de la consolidación de los pesos y contrapesos, lograr afianzar las instituciones que la rigen. Sólo se puede saber qué tan fuertes o débiles son las instituciones democráticas cuando se las pone a prueba.

Si bien esta autora acepta que no es posible imponer una democracia desde afuera, explica que siempre el impulso democrático surge desde adentro. Sostiene que para Estados Unidos la soberanía nacional no otorga inmunidad a la represión (Rice, 2017: 22). Resalta, además, la importancia de las instituciones en tanto que facilitan la interacción social. Finalmente, nos recuerda que “la paradoja de la democracia consiste en que su estabilidad nace de su apertura al cambio repentino a través de las elecciones, la nueva legislación y la acción social. El conflicto forma parte del tejido de la democracia” (Rice, 2017: 9). Por otra parte, categóricamente niega la postura, por considerarla un prejuicio, que asegura que sólo algunas culturas pueden adaptarse a la democracia, y en este sentido postula que este sistema político es universalmente el mejor posible para todos los pueblos.

Rice resalta la relevancia que se dio en Estados Unidos a los pesos y contrapesos desde un principio. Las tres ramas del gobierno se supervisan entre sí. Al gobierno federal lo vigilan los locales, y se defienden tanto los derechos de las mayorías como los de las minorías. En este sentido, se creó un conjunto de instituciones para limitar el poder del gobierno sobre los individuos. Así, el papel de los gobiernos locales es fundamental, porque están cerca de las personas y pueden percibir mejor sus objetivos, esperanzas y miedos. Son estas condiciones de libertad las que permiten a los ciudadanos perseguir su derecho a la felicidad, es decir, luchar por cumplir sus metas (Rice, 2017: 44). La profesora de Stanford también subraya el papel fundamental que ha jugado en la Unión Americana la existencia de una sociedad civil fuerte.

Explica que la participación política de los ciudadanos es esencial para la transición democrática: la ciudadanía en su conjunto comparte la visión de un futuro mejor así como la voluntad para conseguirlo. El camino de la democracia, advierte, no es fácil y requiere de la negociación y los compromisos. “La historia de la democracia es muy cambiante; surgen siempre nuevos retos, nuevas respuestas y posibilidades, buenas y malas” (Rice, 2017: 439). No visualiza en el presente alguna gran amenaza para la democracia, pero sí le preocupan el proteccionismo, el aislacionismo, el nacionalismo y el nativismo, que amenazan el orden global y la protección de la libertad. Después

de la Gran Depresión y de la segunda guerra mundial, Estados Unidos lideró la creación de un nuevo orden mundial que promovía el libre mercado y el gobierno democrático. Este arreglo internacional está siendo cuestionado actualmente.

Liberalismo versus iliberalismo

Para el politólogo de la Universidad de Nueva York, Stephen Holmes, el tema de las amenazas a y los peligros de la democracia liberal no es meramente académico, sino que puede llegar a tener consecuencias lamentables y peligrosas tanto para nuestra vida individual como para la colectiva (Holmes, 2018: 387). La política, de acuerdo con este autor, se trata de promesas y decepciones, y una de las cualidades de la democracia liberal es que puede manejar y mitigar el descontento. Esto significa que se trata de un sistema político que ayuda a contener, sobre todo a través de canales legales y jurisdiccionales, las manifestaciones más violentas en que se expresa dicho malestar, sobre todo ante las muchas veces necesarias políticas públicas impopulares.

Explica que en los tiempos recientes existe descontento en Europa y en Estados Unidos respecto de la democracia liberal, sobre todo en los jóvenes, quienes muestran escaso interés en participar. Las personas menores de cuarenta años no pueden tener memoria de cómo era la vida en los regímenes fascistas y totalitarios. Más precisamente, no existe en la actualidad el compromiso ni de las elites ni de la población en general, de luchar por la consolidación del sistema liberal-democrático, el cual indudablemente se ha debilitado, con potenciales terribles consecuencias (Holmes, 2018: 392). En tiempos de múltiples adversidades resultan aún más imprescindibles los incentivos para defender a este tipo de regímenes políticos. Las democracias mueren cuando se presenta una serie de acontecimientos que no se previeron. Su sobrevivencia “depende, esencialmente, de que las fuerzas sociales estén preparadas para combatir el populismo y la demagogia y otras tendencias corrosivas, para así mantener las normas, los procedimientos y los valores de la democracia” (Holmes, 2018: 394). Considera, asimismo, que lo más relevante es la capacidad psicológica y organizativa de la ciudadanía para llevar a cabo su defensa.

En este sentido alerta acerca del peligro que significa un líder carismático y populista que muestra indiferencia hacia el orden constitucional, así

como falta de voluntad para defender las instituciones democráticas. Para este autor, las principales dudas de las poblaciones acerca de la democracia como régimen de gobierno y como sistema de vida han surgido por un conjunto amplio de causas y circunstancias:

1. Las elecciones no son una opción colectiva inamovible. Es preciso recordar que son sólo la fotografía de un momento concreto, pero en realidad las preferencias son muy volátiles. Un ejemplo: en la votación sobre el Brexit, muchos electores británicos se arrepintieron del sentido de sus sufragios cuando se informaron y adquirieron un mayor conocimiento del tema, e incluso muchos otros se lamentan todavía de no haber acudido a las urnas.
2. En la competencia electoral los partidos formulan y expresan muchísimas promesas con tal de ganar, pero es poco probable que puedan cumplirlas.
3. Las condiciones económicas pueden frustrar las expectativas: “En 1970, el 10 por ciento de los estadounidenses ganaba menos que sus padres a la misma edad. Para 2010, ese porcentaje cambió al 50 por ciento” (Leonhardt, citado en Holmes, 2018: 397).
4. La amnesia histórica. La población ha olvidado, por ejemplo, la recesión económica de 1929, lo cual explica su incomprensible apoyo posterior al debilitamiento del Estado de bienestar. También los pueblos han olvidado los horrores del fascismo, con todo y la xenofobia y el nacionalismo cerrado y dogmático que instauró.
5. La guerra fría también parece estar olvidada, lo que nos explica, por ejemplo, fenómenos tan cuestionables como el apoyo de amplios sectores sociales a las propuestas para reducir los derechos para los sospechosos de ciertos delitos graves. La guerra contra el terrorismo ha traído consigo otras prácticas similares, como la violación de la privacidad de los individuos por supuestos motivos de seguridad nacional o, al mismo tiempo, la tendencia de los gobiernos a clasificar como secretos de Estado cada vez más asuntos, en detrimento de la institución democrática de la rendición de cuentas.
6. “El pluralismo de los medios [de comunicación] es una condición esencial de la democracia liberal” (Holmes, 2018: 400); sin embargo, con el auge de las redes sociales y de las plataformas digitales se ha produ-

cido la fragmentación del espacio político. Por su parte, la Casa Blanca, en la administración Trump, ha lanzado una guerra contra los medios tradicionales y contra la primera enmienda (que garantiza, entre otras cosas, las libertades de expresión y de reunión), con el pretexto de que es necesario para transferirle el poder al pueblo.

7. Los operadores financieros, que se han apropiado del sistema político y no son sujetos de votación para poder sustituirlos. Las políticas económicas ya no cambian. Si la opinión pública no tiene canales de expresión, el descontento puede incluso desembocar en la violencia: “El sufragio universal debe observarse bajo esta luz. Las figuras políticas más peligrosas son esas que claman hablar por la mayoría” (Holmes, 2018: 402). Todos deben ser considerados y ningún partido puede atribuirse que representa a todos, porque existen individuos que votaron por otras organizaciones y otros que no lo hicieron. Es precisamente la existencia de varios partidos que se alternan en el poder lo que puede ayudar a filtrar el descontento.
8. Los sistemas autoritarios surgen en las sociedades polarizadas, en las que se buscan enemigos fáciles.
9. El proyecto estadounidense de exportar la democracia ha sido contraproducente y se autodestruye: “El optimismo fácil de que la cultura política podría cambiarse por medio de una campaña militar de seis semanas estaba basado en el fracaso de distinguir entre la ausencia de obstáculos a la democracia y la presencia de precondiciones para su consolidación. La democracia es [sólo] un pequeño punto en la historia humana” (Holmes, 2018: 407).
10. Los líderes autoritarios en el poder empiezan poco a poco a desmantelar los pesos y contrapesos del sistema, comienzan por debilitar a la prensa y a las cortes. Como en Polonia y Hungría, utilizan una narrativa en contra de las elites de las organizaciones no gubernamentales, del *establishment*, del multiculturalismo que, según ellos, atenta contra la identidad nacional: “La Hungría real y la Polonia real están siendo atacadas por el hiperliberal Estados Unidos, que está arrogantemente empujándolas a aceptar a los musulmanes migrantes, quienes son culturalmente inadmisibles en sus países” (Holmes, 2018: 409). Se les niega así a las naciones el derecho soberano de tomar sus propias decisiones respecto de cuántos migrantes pueden admitir y a quiénes. Todo esto expresa, en el fondo, la lucha actual entre partidarios de la

globalización y nativistas. Estas políticas de exclusión están afectando a las democracias (Holmes, 2018: 395-408).

Las masas populistas acuden a votar para evidenciar la diferencia entre el “ellos” y el “nosotros”. En este sentido, Holmes se pregunta qué es lo que ha provocado este movimiento mundial antiliberal y contra la democracia; responde que, paradójicamente, fue la visión dominante de que el único camino para la humanidad era la democracia con políticas liberales.

A todos los países se los medía con los mismos parámetros: desarrollo democrático, lucha anticorrupción, nivel de transparencia, respeto de los derechos humanos y aplicación del Estado de derecho. Lo cual condujo a que muchos Estados-nación fueran duramente juzgados y considerados de segundo nivel, aunque Estados Unidos, hipócritamente, no se evaluaba a sí mismo con el mismo rasero. Por otra parte, las poderosas naciones occidentales menospreciaron la grandeza de las demás culturas.

Holmes argumenta que para explicar el fenómeno de los populismos es preciso centrarse más que en las grandes diferencias económicas en percibir y reconocer el miedo, la angustia y la inseguridad que sienten amplios segmentos poblacionales de que se reduzcan tanto sus niveles de bienestar como, incluso, el aprecio de la sociedad en su conjunto por su participación en el pacto social. Los robots que progresivamente sustituyen tanto a trabajadores como a militares rompen la liga de necesidad que solía existir entre las elites y las masas. Por lo tanto, los electores ya no piensan que pueden ejercer algún tipo de control sobre las primeras, una circunstancia que sin duda ha debilitado considerablemente a las democracias (Holmes, 2018: 417).

El autor que analizamos sostiene que se ha perdido la comunicación efectiva entre las elites y el “pueblo”, lo cual abre las puertas para que los líderes populistas construyan sus estrategias políticas con base en el ataque frontal a aquéllas. A través de la creación artificial de enemigos logran desviar el foco de atención sobre sus propios errores y alejan el resentimiento hacia sí mismos: “[Los] populistas, desde Orban y Kaczynski hasta Trump buscan, con toda intención, el apoyo electoral de la gente poco informada, de los votantes pobremente educados” (Holmes, 2018: 419).

Holmes advierte sobre el atractivo que tiene para este tipo de líderes la posibilidad de crear una situación de guerra o de crisis internacional con tal de que “el pueblo” cierre filas detrás de ellos: “Polarización y división son tal vez

las tácticas más efectivas utilizadas por los autodescritos representantes del ‘verdadero pueblo’ para estigmatizar al pluralismo liberal y, si es posible, para obtener reautorizaciones periódicas [para continuar en el poder] por parte de electores confusos, enojados y con miedo (Holmes, 2018: 420).

Si bien en la concepción de Holmes las instituciones democráticas son sumamente importantes, más relevante aún es su apuesta por el voluntarismo. Depende de la voluntad de los defensores de la democracia y de sus instituciones poder organizarse y presentar un frente unido para dar tan trascendente batalla.

La muy evidente y clara condición de polarización de las sociedades actuales normalmente la utilizan con completa conciencia los líderes populistas para conseguir sus propios fines. Nos recuerda Holmes, en este sentido, los terribles ejemplos que al respecto ofrece la historia, que nos hacen apreciar una vez más el gran valor del sistema político democrático a pesar de todas sus limitaciones y todos sus errores. La democracia liberal continúa siendo el mejor marco político e institucional para la convivencia pacífica y el progreso de los individuos y el avance de las sociedades.

Edward Luce, por su parte, expresa su gran preocupación por el incuestionable retroceso del liberalismo occidental. Advierte: “La creencia en la versión autoritaria de un destino nacional está protagonizando un poderoso retorno. El liberalismo occidental está bajo ataque” (Luce, 2017: 11). Aclara que no son los líderes como Donald Trump los causantes de los más de 25 fracasos recientes de la democracia, como los de Filipinas, Turquía, Polonia, Venezuela, Nicaragua, etc., sino que éstos constituyen sólo el síntoma de lo que hoy sucede en la sociedad. En muchos países, explica, a consecuencia de la globalización y la automatización, las clases medias (salvo las de China e India) se están reduciendo y viven con una gran inseguridad cotidiana. El salario medio es más bajo que a principios de siglo en términos reales. Al mismo tiempo, la riqueza del 1 por ciento de la población ha aumentado en dos terceras partes en ese mismo periodo.

La crisis del 2008 ocasionó que se desatara, a la vez, una gran desconfianza hacia las instituciones financieras, así como en el gobierno. Mientras que las economías de Occidente se contrajeron, las de India y China crecieron. El más eficaz cemento de la democracia liberal es el crecimiento económico, pero cuando los beneficios del desarrollo son acaparados por unos cuantos, la disputa por los recursos se torna una lucha de suma cero. Las

elites globales no pusieron atención a los grandes costos que sus exageradas ganancias generaban. Y de alguna forma también se olvidaron de considerar cómo debían proteger a su propia nación, centrándose solamente en sus intereses particulares.

Tradicionalmente, cuando el desarrollo es significativo se produce también la concentración de la riqueza, y al mismo tiempo se frena la movilidad social. La meritocracia, que tradicionalmente funcionó muy bien en Estados Unidos, obtiene todavía mejores resultados en otras partes del mundo. “La sociedad meritocrática ha dado paso a una meritocracia hereditaria” (Luce, 2017: 43). Los hijos de las elites son quienes más fácilmente son aceptados en las mejores universidades, mientras que los estudiantes promedio no sólo no ingresan en las mejores instituciones educativas, sino que adquieren una enorme deuda para financiar su educación superior.

Los cambios tecnológicos, sobre todo aquellos relacionados con la automatización y con la inteligencia artificial, han transformado el mundo del trabajo, y afectado en gran medida a los trabajadores medios, sobre todo a quienes están menos preparados, cuyas labores no son especializadas. Gran parte de los empleos actuales corren el peligro de ser sustituidos por máquinas que puede desempeñar las mismas funciones en forma más eficiente. Al mismo tiempo, el valor de las pensiones disminuye y la seguridad social se restringe cada vez más; debido a ello los adultos mayores ya no quieren retirarse, pues requieren seguir trabajando para mantener su nivel de vida.

Este pesimismo por el futuro normalmente ha surgido cuando se producen las revoluciones tecnológicas. Ahora bien, no es una tendencia fatal. Se puede construir una idea de futuro que sea optimista aunque para ello se requiere del diálogo entre los científicos del mundo, con la finalidad de visualizar el o los ámbitos en que se puedan crear empleos bien remunerados que nos permitan trabajar, por ejemplo, desde la comodidad del hogar, y evitar así el tráfico de nuestras grandes ciudades. Se trata de concebir nuevas ocupaciones que sean bien pagadas y sirvan para mejorar el bienestar social.

Algo ha pasado con el contrato social occidental. Ya no son los individuos quienes se constituyen como las partes de dicho contrato, sino los distintos grupos étnicos o tribus: “El liberalismo de la identidad, una política que trata a la sociedad como algo menos que la suma de sus partes, es parcialmente responsable” (Luce, 2017: 14).